

REPUBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLIN



SALA LABORAL
Acta N° 60

Medellín, treinta (30) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

En la fecha, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Segunda de Decisión Laboral, se reunió para emitir sentencia de segunda instancia en la que se resuelve el recurso de apelación interpuesto y el grado de consulta, en el proceso ordinario laboral promovido por el señor **HORACIO DE JESÚS VILLEGAS CASTILLO** contra **COLFONDOS S.A.**, la **NACIÓN-MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y COLPENSIONES (integrado)**.

De acuerdo a lo dispuesto en la ley 2213 de junio de 2022, la presente decisión se profiere mediante sentencia escrita.

Téngase a la sociedad **Muñoz y Escrucerías S.A.S.**, como apoderada de **Colpensiones**, para los efectos y en los términos del poder conferido.

Se reconoce personería al Dr. **Juan Felipe Ochoa Sánchez**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 1.040.732.989 de la Estrella y Tarjeta Profesional No. 264.143 del C.S.J., como apoderado sustituto de **Colpensiones**, para los efectos y en los términos del poder conferido por Eliana Moreno Pedraza, quien se identifica con CC 43.921.415 y TP 173.191. del CS de la J.

ANTECEDENTES

Pretensiones

El actor solicitó que se declare que le asiste derecho a la pensión de vejez o de forma subsidiaria a garantía de pensión mínima.

Hechos

Nació el **14 de septiembre de 1954** y en la actualidad cuenta con 69 años de edad, se encuentra afiliado al Fondo de Pensiones Colfondos S.A., y cuenta con más de 1165 semanas cotizadas.

Solicitó pensión de vejez ante el fondo privado en julio de 2018, la cual fue resuelta por medio de comunicado 16 de noviembre de 2018, en la cual se le informó que no se podía dar trámite a la petición en razón a que Colpensiones no había trasladado los aportes por las cotizaciones que se habían realizado a esa entidad.

Cuenta en toda la vida laboral con 1165 semanas cotizadas de las cuales 995 es a Colfondos S.A., y 40.14 lo hizo a Colpensiones, por lo tanto, acredita con suficiencia el derecho reclamado.

Contestación de Colfondo S.A.

La administradora de pensiones demandada a través de apoderada, indicó en general que no le constan los hechos de la demanda, sin embargo, la actora no reúne los requisitos para acceder a la pensión de vejez, toda vez que no cuenta con el capital suficiente en su cuenta de ahorro individual, tampoco para la GPM.

Se opuso a las pretensiones y propuso como excepciones: Falta de integración del contradictorio, petición antes de tiempo, falta de causa para pedir, inexistencia de las obligaciones demandadas, buena fe y prescripción.

Contestación Colpensiones (integrado)

Entidad que manifestó que son ciertos los hechos de la demanda y que cuando el actor estuvo afiliado a esa administradora, logró cotizar 40.14 semanas, las cuales ya fueron devueltas a Colfondos conforme el Decreto 3798 de 2003, según prueba que se aporta al proceso.

Se opuso a las pretensiones y propuso como excepciones: Inexistencia de la obligación, buena fe, improcedencia de intereses de mora, improcedencia indexación de las condenas, prescripción, cobro de lo no debido, improcedencia de condena en costas y compensación.

Respuesta Ministerio de Hacienda y Crédito Público:

Manifiesta dicha entidad que no le constan los hechos de la demanda, el Ministerio no es una entidad que reconozca prestaciones, lo que para el caso está únicamente en cabeza de Colfondos S.A., quien a la fecha no ha pasado solicitud de reconocimiento de garantía de pensión mínima a favor del demandante afiliado a ese fondo.

Se opuso a la prosperidad de las pretensiones y propuso como excepciones: Inexistencia de la obligación, ausencia de responsabilidad de la nación, buena fe.

Sentencia de Primera Instancia

El Juez Décimo Laboral del Circuito de Medellín en sentencia del **02 de diciembre de 2022**, Declaró que el actor no acredita los requisitos para acceder a la pensión de vejez, pero sí para la garantía de pensión mínima. Por lo tanto, condenó a su reconocimiento de la siguiente manera:

CONDENAR a COLFONDOS S.A y al MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO a realizar los trámites administrativos para reconocer la garantía de pensión mínima al actor.

CONDENANDO a COLFONDOS S.A a pagar de manera vitalicia y provisionalmente con cargo a la cuenta de ahorro individual del demandante HORACIO DE JESÚS VILLEGAS CASTRILLÓN, la garantía de pensión mínima desde el 1 de julio de 2018.

Adeuda COLFONDOS S.A. a HORACIO DE JESÚS VILLEGAS CASTRILLÓN, desde el 1 de julio de 2018 y hasta el 30 de noviembre de 2022 un retroactivo pensional de \$50.456.479, monto del que se autorizan los descuentos por aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud, y sobre el cual, con cargo a sus propios recursos COLFONDOS S.A. deberá reconocer los intereses moratorios del art.141 de la Ley 100 de 1993 a partir del 15 de diciembre de 2018 y hasta tanto se satisfaga la totalidad de la obligación por parte de la administradora de pensiones.

A partir del primero (1º) de diciembre de este año, la entidad demandada continuará reconociendo la mesada pensional, sin perjuicio de los incrementos anuales de ley. Esta prestación debe pagarse con cargo a la Cuenta de Ahorro Individual, faltando un año para el agotamiento de dichos recursos el MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO a través de la dependencia competente, concurrirá con la financiación que corresponda.

ABSOLVER a COLPENSIONES de todas las pretensiones incoadas en su contra. Se declara no probada la excepción de prescripción, las demás implícitamente resueltas.

COSTAS a cargo de COLFONDOS S.A. y del MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.

Se fijan como agencias en derecho \$2'522.824, distribuidos en partes iguales a cargo de las entidades ya referidas.

Recurso de apelación Colfondos

La apoderada del fondo privado manifestó estar de acuerdo con la decisión en general, sin embargo, no en lo relacionado con los intereses moratorios del art. 141 de la ley 100 de 1993, toda vez que estos son una sanción cuando existe una pensión reconocida y se entra en mora en el pago de mesadas pensionales, además para reconocerse la pensión de garantía mínima debe contar con el aval del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, entonces la mora no se atribuye al fondo. Por tanto, en el caso lo que procede es la indexación de las condenas.

Recurso Ministerio de Hacienda y Crédito Público:

No está de acuerdo en lo ordenado por el Juez en cuanto que el Ministerio debe concurrir a la financiación de la GPM, cuando se agote el dinero que se encuentre en la cuenta de ahorro individual del actor.

El juez no dijo cuál es el fundamento normativo para esa orden, entonces incurrió en una vía de hecho, art. 4 Decreto 832 de 1996, además no toda la ley 797 de 2003 fue declarada inexecutable sino el art. 14.

Debe ser el fondo de garantía de pensión mínima y no el ministerio quien siga concurriendo con el pago de la pensión de garantía mínima.

Respecto de las costas tampoco debe ser condenado el Ministerio, toda vez que no fue este quien negó la prestación en razón a que no le correspondía, era al fondo privado.

Alegatos de conclusión

Corrido el término de traslado consagrado en la ley 2213 de junio de 2022. El Ministerio Manifestó:

Pese a que la norma habla de sumas “adicionales a cargo de la Nación”, ello no es del todo cierto en la actualidad. Es necesario tener en cuenta que después de la Ley 100 de 1993 y el Decreto 832 de 1996, sobre la financiación de las GPM han surgido nuevas normas cuya aplicación prevalece a la literalidad de las referidas disposiciones de la década de los 90's, no solo por el criterio de temporalidad que establece el artículo 2 de la Ley 153 de 18871, sino también por el criterio de especialidad reconocido de antaño por la Corte Constitucional.

En efecto, el artículo 7 de la Ley 797 de 2003, que se encuentra vigente, modificó el artículo 20 de la Ley 100 de 1993 y ordenó que, de la cotización de cada afiliado al RAIS se destine un porcentaje al Fondo de Garantía de Pensión Mínima, destinación que en la actualidad efectúan todas las AFP en estricto cumplimiento del mencionado artículo 20.

La existencia y funcionamiento del Fondo de Garantía de Pensión Mínima también se puede apreciar en el contraste que existe entre la redacción original del artículo 832 de 1996 y el texto actual fruto de la modificación del Decreto 142 de 2006, pues en el primero se habla de manera expresa de que la Nación girará mensualmente a cada AFP el valor de las mesadas pensionales de un beneficiario de una GPM, mientras que en el segundo se sostiene que la Nación tomará las medidas oportunas para “disponer de los recursos necesarios para continuar con el pago con cargo a dicha garantía

Las anteriores consideraciones son necesarias, a fin de evitar que, una interpretación literal del artículo 65 haga pensar que es “La Nación” la llamada a sufragar subsidiariamente las garantías de pensión mínima. Lo cierto es, que el dinero que subsidia una GPM proviene de aquellos descuentos que se efectúan al Fondo de Garantía de Pensión Mínima, que como queda demostrado, está ampliamente reconocido en normas de orden público que no pueden ser ignoradas, pues son de orden público.

De conformidad con el artículo 4 del Decreto 832 de 1996, reglamentario del artículo 65 de la Ley 100 de 1993, al Ministerio de Hacienda corresponde proferir el acto administrativo mediante el cual se reconoce una garantía de pensión mínima. Para poder expedir dicho acto, el Ministerio se basa en los documentos mediante los cuales las AFP acreditan que sus afiliados cumplen con los requisitos que la ley establece para poder acceder a dicho beneficio.

Así pues, la competencia de esta cartera en el trámite de la GPM, solo implica el reconocimiento de la misma, más no el pago, dado que éste último, radica en cabeza de la AFP a la cual se encuentre afiliado el beneficiario de dicha garantía, con cargo al respectivo Fondo de Garantía de Pensión Mínima que administra. Esto es importante para precisar que, ante un eventual reconocimiento de la GPM en favor de la demandante, la Nación no efectúa transferencia de recursos para el financiamiento de la misma dado que estos, de conformidad con lo establecido en la Ley 797 de 2003, son obtenidos del Fondo de Garantía de Pensión Mínima que se nutre del 1.5% de las cotizaciones que por concepto de pensión obligatoria realizan los afiliados al RAIS.

Cuando el fallo dispone que agotados los recursos de la cuenta de ahorro individual del demandante mi representada deberá concurrir con la financiación que corresponda, lo que está haciendo es dejando de aplicar, debiendo hacerlo, todas las normas que estando vigentes hablan y regulan el funcionamiento del Fondo de Garantía de Pensión Mínima. Este proceder desconoce normas de orden público, por lo que constituye una violación del artículo 230 de la Constitución y en consecuencia debe ser revocado.

Pues bien, en el presente caso el fondo fue objeto de una condena, cuya revocatoria es objeto de la primera parte del recurso de apelación, no obstante, la prosperidad de la primera solicitud de la apelación conlleva a que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público no sea condenado, por lo que necesaria y consecuentemente, si la primera solicitud de este recurso es acogida, el Honorable Tribunal deberá acoger igualmente la segunda, dado que mi prohienda dejará de ostentar la calidad de vencido en el proceso, y por ende, conforme al citado art. 365, no deberá ser titular de una condena en costas. Además de lo anterior, el Despacho debe tener en cuenta que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público no fue la entidad que llevó al señor Horacio de Jesús Villegas Castrillón a tener que acudir a la administración de justicia para que le fuera reconocida su GPM. Por el contrario, tal y como se indicó desde el escrito de contestación, toda la demora se debió a que la AFP Colfondos S.A. incumplió con la obligación que le establecen los artículos 4 del Decreto 832 de 1996 y 83 de la Ley 100 de 1993, de acuerdo con los cuales, debe adelantar a nombre de sus afiliados todos los trámites concernientes para el reconocimiento oportuno de la GPM.

Nótese que, inclusive cuando la Litis ya había sido trabada, y la AFP en mención ya había contestado, la misma no había solicitado el reconocimiento de la GPM a favor del demandante, siendo por ello evidente, que toda demora en este trámite no tiene un responsable distinto a la referida AFP.

Alguien podría afirmar que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público debería haber “buscado una solución jurídica” para el pronto reconocimiento de la GPM a favor del actor, no obstante, un razonamiento de este tipo estaría desconociendo que no existe ninguna norma del ordenamiento jurídico que faculte a esta Cartera para buscar soluciones al incumplimiento de las obligaciones legales de las AFP, por lo que de hacerlo, estaría desobedeciendo la Ley y en específico el principio de legalidad de la actuación administrativa, positivizado en los artículos 6 y 121 Superiores, en concordancia con el artículo 5 de la Ley 489 de 1998.

Finalmente, no sobra precisar que el numeral primero de la parte resolutive de la Sentencia tampoco implica una condena a cargo del Ministerio de Hacienda y Crédito Público que pueda llegar a justificar la existencia de una condena en costas en su contra, dado que se trata de una orden completamente ajustada a lo que esta Cartera ha reconocido y explicado desde el momento en que fue vinculada al proceso, esto es, que sí es la competente para expedir el acto administrativo de reconocimiento de la GPM, pero que para poder hacerlo es necesario que la AFP solicite de manera adecuada aquel reconocimiento, que de lo contrario, sería imposible. Así pues, si la orden dada en el numeral primero de la sentencia no es una condena adversa a los intereses de esta entidad, y la condena impuesta en el numeral segundo debe ser revocada,

resulta forzoso concluir que la condena en costas no tiene razón de ser y por ello debe ser igualmente revocada.

Alegatos Colpensiones

Se solicita respetuosamente al Despacho que se tengan en cuenta los alegatos de primera instancia y que nuevamente en la presente instancia de conocimiento, se confirme la decisión del Ad-quo, teniendo en cuenta que COLPENSIONES ya ejecutó el traslado de aportes como se evidencia en la certificación emitida y enviada al juzgado con fecha del 19 de octubre del 2021, en la cual se demuestra que se realizó la devolución de aportes a la Administradora de Fondos de Pensiones COLFONDOS, a nombre del señor HORACIO DE JESUS VILLEGAS CASTRILLON identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 3.528.569, por concepto de “Inactividad laboral – Decreto 3798, devolución por menos de 150 semanas- Decreto 3995, Multiafiliación y No Vinculados”, para los periodos entre 1981/10 hasta 1999/06, por los aportes que no correspondían al Régimen de Prima Media con Prestación Definida administrado por COLPENSIONES, de acuerdo con el detalle que allí se consigna en la tabla de la certificación que solicitó el Despacho.

Al respecto de las costas, cabe indicar Honorables Magistrados, que las mismas no deben ser condenadas a mi representada COLPENSIONES, conforme a que, de lo señalado dentro del proceso, el mismo fue admitido en el grado jurisdiccional de CONSULTA, como también se evidencia que dentro de los alegatos presentados se encuentra este apoderado de acuerdo con lo sustentado y fallado nuevamente por el Ad-quo.

Problema Jurídico

Los problemas jurídicos a resolver en esta instancia de conformidad con los recursos interpuestos y el grado de consulta en favor del Ministerio de Hacienda y Crédito Público serán: Determinar si el actor acredita los requisitos para acceder a la garantía de pensión mínima, cómo son los trámites para su reconocimiento y si es procedente la forma en la que el a quo emitió la orden respecto del Ministerio de hacienda y Crédito Público, así mismo si Colfondos incurrió en mora en el reconocimiento pensional y debe condenarse al pago de intereses moratorios o la indexación y si deben revocarse las costas impuesta a la entidad pública.

CONSIDERACIONES

Antes de resolver, considera la Sala importante hacer las siguientes precisiones de conformidad con la prueba obrante en el expediente:

1. El señor **Horacio De Jesús Villegas Castillo** nació el **14 de septiembre de 1954**, cumplió 62 años el 14 de septiembre de 2016.
2. Conforme se observa en la Historia Laboral emitida por Colfondos S.A. el actor acredita cotizaciones por 1165 semanas.
3. Reclamó ante la entidad administradora el reconocimiento de pensión y fue negada el 16 de noviembre de 2018, con el argumento de no acreditar el capital ahorrado en la cuenta de ahorro pensional del actor.
4. La entidad se ha negado a su reconocimiento, bajo el argumento que Colpensiones no había trasladado los aportes de las cotizaciones realizadas a ese fondo.

A partir de los anteriores hechos procederá la Sala a resolver los problemas jurídicos puestos en su conocimiento:

Del cumplimiento de los requisitos para acceder a la pensión de garantía mínima.

Referente al tema que nos ocupa el artículo **65 de la ley 100 de 1993**. Establece la Garantía de Pensión Mínima de Vejez. En el sentido de que los afiliados que a los 62 años de edad si son hombres y 57 si son mujeres, no hayan alcanzado a generar la pensión mínima de que trata el artículo 35 de la presente Ley, y hubiesen cotizado por lo menos 1.150 semanas, tendrán derecho a que el Gobierno Nacional, en desarrollo del principio de solidaridad, les complete la parte que haga falta para obtener dicha pensión.

Ahora, dentro del proceso que nos ocupa quedó probado que el actor cotizó en toda su vida laboral más de 1150 semanas, porque para 2018 la entidad le reconoce que acredita 1166, lo que se corrobora de su historia laboral, además cumplió 62 años el 14 de septiembre de 2016, en razón a que nació el 14 de septiembre de 1954, es decir que dicho señor acredita los requisitos para acceder a la Garantía de Pensión Mínima, como en efecto lo declaró y ordenó el a quo.

Ahora bien, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en su recurso manifestó no estar de acuerdo en que el Juez haya dejado establecido concretamente lo siguiente:

“Esta prestación debe pagarse con cargo a la Cuenta de Ahorro Individual, faltando un año para el agotamiento de dichos recursos el MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO a través de la dependencia competente, concurrirá con la financiación que corresponda”.

Por lo que procede la Sala a analizar si el juez incurrió en algún yerro tal como lo manifiesta el apelante.

De la responsabilidad de los fondos de pensiones de tramitar el requerimiento de la garantía de pensión mínima ante la OBP del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

De conformidad con el inciso segundo del artículo 83 de la Ley 100 de 1993, corresponde a las administradoras de pensiones adelantar en nombre del afiliado, los trámites necesarios para que se hagan efectivas las garantías de pensión mínima.

El art. 2 del **Decreto 142 de 2006** reza

“En desarrollo del artículo 83 de Ley 100 de 1993, cuando la AFP verifique, de acuerdo con los anteriores cálculos, que un afiliado que ha iniciado los trámites necesarios para obtener la pensión de vejez reúne los requisitos para pensionarse contenidos en el artículo 64 de la misma, pero el saldo en su cuenta individual es menor que el Saldo requerido para una Pensión Mínima, incluido el valor del bono y/o título pensional, iniciará los pagos mensuales de la respectiva pensión con cargo a la cuenta de ahorro individual, previo reconocimiento de la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público del derecho a la garantía de pensión mínima, reconocimiento que se efectuará en un plazo no superior a cuatro (4) meses contados a partir del recibo de la solicitud. En estos casos, la AFP informará a la OBP cuando el saldo de la cuenta individual indique que se agotará en un plazo de un año, con el fin de que tome oportunamente las medidas tendientes a disponer los recursos necesarios para continuar el pago con cargo a dicha garantía....

a) Cuando previa aplicación de las fórmulas de cálculo relativas a la proyección del saldo indiquen que los recursos de la cuenta individual se agotarán en un período igual o inferior a un año, la AFP así lo informará a la Oficina de Bonos Pensionales, indicando además la suma requerida para atender la anualidad siguiente. En este caso, la Oficina de Bonos Pensionales deberá tomar las medidas y, si es el caso, apropiar las partidas necesarias para que la AFP, con cargo a los recursos de la Garantía de Pensión Mínima del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad cancele la garantía de pensión mínima que se cause;

b) La AFP, una vez haya sido informada por la Oficina de Bonos Pensionales sobre el reconocimiento y, si es el caso sobre el registro presupuestal correspondiente, continuará el pago mensual de la pensión respectiva con cargo a los recursos de la Garantía de Pensión Mínima del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad;

c) La AFP deberá, semestralmente, informar a la Oficina de Bonos Pensionales y a la Superintendencia Financiera de Colombia, en los términos que la última indique, los montos cancelados a título de garantía de pensión mínima y los beneficiarios de la misma, así como la suma requerida para la anualidad siguiente, si hay lugar a ello.

Y a su paso el art. 3 de dicha normativa establece.

Artículo 3°. Pago de la garantía de pensión mínima en los eventos de redención posterior del Bono Pensional. En los casos de las mujeres a las que no se les puede redimir el bono pensional hasta los 60 años, pero cumplen con los requisitos para tener derecho a la garantía de pensión mínima, para determinar el capital mínimo para financiar una pensión de vejez, debe tenerse en cuenta el valor del bono pensional a la fecha de redención del mismo.

Si después de efectuado el cálculo se determina que el capital es insuficiente para obtener una pensión mínima antes de la fecha de redención del bono pensional, a pesar de ser suficiente para obtener la pensión mínima a partir de esta misma fecha, la AFP procederá a solicitar el reconocimiento de la garantía de pensión mínima de manera temporal por el período correspondiente hasta la fecha de redención del bono pensional. La AFP comenzará a pagar la mesada con los fondos que se encuentren en la cuenta de ahorro individual e informará a la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público sobre el saldo de la cuenta individual para los efectos y dentro del término previsto en el artículo 9° del Decreto 832 de 1996. Una vez se cumpla la fecha para la redención del bono pensional, se pagará el mismo descontando el valor cancelado por razón de la garantía temporal.

La Corte Suprema de Justicia en la sentencia SL 451 de 2013 dijo.

La Sala ha expresado en este punto que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 48 del Decreto 1748 de 1995, modificado por el artículo 20 del Decreto 1513 de 1998, es a las administradoras de fondos de pensiones a quienes corresponde ejercer todas aquellas acciones encaminadas a completar el capital de la cuenta de ahorro individual de sus afiliados, como las que tienen que ver con la emisión de los bonos pensionales. (Ver la sentencia del 19 de mayo de 2009, Rad. 34810).

Por lo mismo, a pesar de que las normas que el censor considera infringidas directamente, contemplan la obligación para la Nación de expedir los bonos pensionales como el que aquí se trata, la responsabilidad por la conformación del capital de la cuenta de ahorro individual de la demandante y por el pago de la prestación reclamada, indudablemente es de la sociedad demandada.

Resta advertir que, a través de la providencia del 5 de octubre de 2006, el Tribunal definió que no era necesaria la participación en el proceso de la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y que ese es un tema procesal que quedó definitivamente resuelto en las instancias, no susceptible de controversia por la vía del recurso de casación....

En lo referente a las obligaciones de las AFP de cara al trámite de la garantía de pensión mínima, es importante recordar lo enseñado por la Sala laboral de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia **SL-2735-2020**, en la que se expresó:

..No sobra precisar que la contribución que realiza el Estado a través de la oficina de Obligaciones Pensionales del Ministerio de Hacienda, es para el asegurado que, como el caso del actor, no logró acumular el capital suficiente para financiar su pensión de vejez, siendo de responsabilidad de la entidad de seguridad social, como administradora del fondo pensiones del régimen de ahorro individual, el reconocimiento de ésta y no de dicho ente ministerial, pues, se insiste, es por conducto de esta entidad que el Estado aporta lo que hace falta a los asegurados para no ver truncada la garantía de vejez, pues es a eso a lo que se refieren los artículos 64 y 65 de la Ley 100 de 1993, lo que, se repite, no desdice de las funciones que competen al citado Ministerio...

Así mismo en la sentencia **SL2512 de 2021 MP Fernando Castillo Cadena se dijo:**

....De allí que en primer lugar la prestación se pague con los recursos de la misma cuenta de ahorro pensional y solo cuando estos se agoten se pueda acudir a los recursos del subsidio. Así se establece en cabeza de la AFP el control de saldos de la pensión reconocida a efectos de que al percatarse de que los recursos de la CAI no son suficientes para financiar la mesada le informa a la OBP para que la entidad proceda a efectuar la apropiación de recursos para ello autorización de los recursos del subsidio...

Siendo claro que la asignación del subsidio bajo la garantía de pensión mínima es estatal y por ende su reconocimiento está exclusivamente en cabeza del estado –Oficina de Bonos pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público

En cuanto a la inconformidad presentada por el apoderado del Ministerio de Hacienda y Crédito Público la Sala encuentra que en efecto le asiste razón al apoderado por lo siguiente:

El a quo, en la providencia señaló “*el MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO a través de la dependencia competente, concurrirá con la financiación que corresponda*”. Orden que no es de recibo por lo siguiente:

En cuanto a la financiación de la pensión dice el artículo 4o. del Decreto 832 de 1996 modificado por el art. 1 del Decreto 142 de 2006. **RECONOCIMIENTO DE LA GARANTÍA DE PENSIÓN MÍNIMA.** *Corresponde a la Oficina de Obligaciones Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el reconocimiento de la garantía de pensión mínima, acto que se expedirá con base en la información que suministre la AFP o la aseguradora, entidades a las cuales, de acuerdo con el artículo 83 de la Ley 100 de 1993, les corresponde adelantar los trámites necesarios para que se hagan efectivas las garantías de pensión mínima...*

ARTÍCULO 7o. decreto 832 de 1996 FINANCIACIÓN DE LA PENSIÓN MÍNIMA DE VEJEZ EN EL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL. *En el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, la Pensión Mínima de Vejez se financiará con los recursos de la cuenta de ahorro individual, incluyendo los aportes voluntarios si los hubiere, con el valor de los bonos y/o títulos pensionales cuando a ello hubiere lugar y, cuando éstos se agotaren, con las sumas mensuales adicionales a cargo de la Nación.*

Art. 2 Decreto 142 de 2006 señala:

En estos casos, la AFP informará a la OBP cuando el saldo de la cuenta individual indique que se agotará en un plazo de un año, con el fin de que tome oportunamente las medidas tendientes a disponer los recursos necesarios para continuar el pago con cargo a dicha garantía. Este reporte se mantendrá mensualmente hasta el agotamiento del saldo de la cuenta individual, aplicando el siguiente procedimiento:

Por su parte la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia dijo en la sentencia SL4531 de 2020 MP Clara Cecilia Dueñas Quevedo respecto al tema en comento.

De lo expuesto, se colige que: (i) la garantía de pensión mínima causada en favor de un afiliado, se financia con el capital obrante en la cuenta de ahorro individual y con los recursos que suministra La Nación en virtud del principio de solidaridad; (ii) a partir de la información que suministre el fondo privado y con sustento en el principio de solidaridad, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público reconoce el capital faltante para la prestación, esto es, la garantía de pensión mínima; (iii) la encargada de gestionar la concesión de tal prerrogativa ante la cartera ministerial, es la administradora de fondos de pensiones en representación del asegurado; y (iv) una vez esta cumple con los requisitos para acceder a la garantía, la entidad pensional debe comenzar el pago con cargo a los recursos que se encuentran en la cuenta de ahorro individual, y al agotarse, La Nación concurre con los que faltan para subvencionarla según lo establecido en el artículo 9.º del Decreto 832 de 1996i

De acuerdo a lo analizado considera la Sala que le asistió razón al apoderado del Ministerio, toda vez que esta entidad no es quien concurre con el pago de la garantía de pensión, sino que únicamente la OBP Oficina de Bonos pensionales de este ente, tiene a su cargo el reconocimiento de aquella, más no es quien paga como tal la prestación, toda vez que no es una entidad administradora ni pagadora de pensiones. En ese sentido debe **ACLARARSE** la orden del juez y en su lugar precisar que cuando los recursos de la cuenta de ahorro individual no son suficientes para financiar la mesada, *la AFP debe informar a la OBP para que aquella realice las medidas tendientes a disponer de los recursos necesarios para garantizar el pago de la prestación.*

De la procedencia de los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993

Respecto a este aspecto considera la apelante que no son procedentes porque únicamente deben ser reconocidos cuando existe una pensión ya otorgada y se entra en mora en su reconocimiento.

Lo primero que menciona la Sala es que de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia los intereses de mora aplican para todo tipo de pensiones, véase la sentencia **SL 1681 del 2020** radicado 75127 MP Clara Cecilia Dueñas y reiterada en la **3130 de 2020** la Corte concluyó lo siguiente:

...Si bien las pensiones del régimen de transición se rigen en tres aspectos puntuales (edad, tiempo de servicios o semanas y monto) por las reglas anteriores, en todo lo demás les aplica la Ley 100 de 1993. Debido a ello, se trata de pensiones englobadas en el sistema general de pensiones, cuyas condiciones de causación son más flexibles o favorables que las del resto de pensionados...

Con lo anterior, la Sala abandona su criterio jurisprudencial anterior y, en su lugar, postula que los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 aplican a todo tipo de pensiones legales, reconocidas con posterioridad a la entrada en vigencia del sistema general de pensiones.

En consecuencia, el Tribunal no erró al conceder en favor de Jairo Carrillo Amaya los intereses moratorios Radicación n.º 75127 SCLAJPT-10 V.00 18 mencionados, pero por las razones acá expuestas. Lo anterior, en la medida que la pensión otorgada al demandante es de estirpe legal (L. 71 de 1988), y fue concedida en virtud del régimen de transición de la Ley 100 de 199...

De otro lado la Corte Suprema ha manifestado que los intereses moratorios no se aplican de manera automática, sino que se debe establecer si la entidad enmarca dentro de algunos de los eximentes que tiene establecidos esa Corporación. Sentencia SL370 de 2020 y SL1020 de 2022.

En el caso que ocupa la atención de la Sala lejos de encontrarse un eximente para el fondo privado, antes lo que se observa es que negó la prestación por una razón inadmisibles como era el hecho que Colpensiones no había pasado los aportes correspondientes a las semanas que cotizó el actor, cuando en el expediente existe prueba que sí lo hizo, además tampoco ha realizado siquiera ante el Ministerio los trámites para la garantía de pensión mínima, aun contando suficientemente el afiliado con los requisitos para acceder a la misma. Por tanto, era dable que el juez condenará a dicho pago al encontrar que la entidad está en mora en el reconocimiento de la pensión, no asistiéndole razón al apelante en cuanto a que procedería la indexación de las condenas. En este aspecto se confirma la sentencia apelada.

Costas

Respecto a las costas impuestas el Ministerio de Hacienda y Crédito Público no comparte que el Juez lo haya condenado a estas, en razón a que no es una entidad que reconozca prestaciones y es el fondo quien hace los trámites para el reconocimiento ante esa entidad.

En este sentido la Sala encuentra que le asiste razón a la entidad pública en su inconformidad, por cuanto estas se imponen como un criterio objetivo a quien resulte vencido en el proceso y en realidad en el caso de la garantía de pensión mínima la negativa fue por parte del Fondo, quien es el encargado también de realizar la solicitud ante el Ministerio, quien por demás no se ha negado, pues no se le ha realizado siquiera solicitud para ese reconocimiento.

Por lo tanto, considera la Sala que se deben **REVOCAR** las costas impuestas en primera instancia a cargo del Ministerio de Hacienda y Crédito Público., en su lugar se **ABSULEVE** de esa condena.

Costas en esta instancia a cargo de Colfondos S.A. y a cargo de la demandante. Las agencias en derecho se estiman en la suma de \$1.160.000.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Segunda de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

CONFIRMAR la providencia de primera instancia dictada por el Juez Décimo Laboral del Circuito de Medellín, el día 02 de diciembre de 2022, en el proceso ordinario laboral adelantado por **HORACIO DE JESÚS VILLEGAS CASTILLO** contra **COLFONDOS S.A.**, la **NACIÓN-MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y COLPENSIONES (integrado al proceso)**, **ACLARANDO** que cuando los recursos de la cuenta de ahorro individual no son suficientes para financiar la mesada, *la AFP debe informar a la OBP para que aquella realice las medidas tendientes a disponer de los recursos necesarios para garantizar el pago de la prestación.*

REVOCAR las costas impuestas en primera instancia a cargo del Ministerio de Hacienda y Crédito Público., en su lugar se **ABSULEVE** de esa condena.

Costas en esta instancia a cargo de Colfondos S.A. y a cargo de la demandante. Las agencias en derecho se estiman en la suma de \$1.160.000.

Lo resuelto se notifica por **EDICTO**.

LOS MAGISTRADOS



CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA



HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ



GUILLERMO CARDONA MARTINEZ



SECRETARÍA SALA LABORAL

EDICTO VIRTUAL

La secretaría de la Sala laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín notifica a las partes la sentencia que a continuación se relaciona:

PROCESO	Ordinario
DEMANDANTE	Horacio De Jesús Villegas Castillo
DEMANDADO	Colfondos S.A. y otros
RADICADO	05-001-31-05- 010-2019-00092-01
DECISIÓN	Aclara y revoca y sentencia
MAGISTRADO PONENTE	Carmen Helena Castaño Cardona

El presente edicto se fija en la página web institucional de la Rama Judicial <https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/148> por el término de un (01) día hábil. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

CONSTANCIA DE FIJACIÓN

Fijado el 31 de marzo de 2023 a las 8:00am

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN

Se desfija el 31 de marzo de 2023 a la 5:00pm


RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
SECRETARIO